

Chile

Claudia Zapata Silva

■ Doi: 10.54871/ca25es3b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

Claudia Zapata: Esta primera pregunta aborda el tema de qué ocurre con los procesos sociopolíticos que convergen en la formación de comunidades políticas de pertenencia, su relación con el gobierno, con los Estados nacionales, y su relación con procesos comunitarios instituyentes. En este contexto, surge el tema de la formulación de políticas de la identidad, de reconocimiento y del pueblo. Se trata de una cuestión bien interesante que nos permite pensar *in situ* y en procesos políticos donde una participa como ciudadana, como académica, como investigadora o como intelectual, pero fundamentalmente como ciudadana. Permite probar los bagajes teóricos, porque la teoría sirve para interpretar los procesos que ocurren o lo que ha ocurrido, lo que se está desarrollando, y ahí han existido colisiones entre marcos teóricos previos en nuestro entorno, que tienen que ver con las discusiones que damos en investigación.

Parto siempre con la precaución de que, para mí, con una formación de historiadora, se me hace complejo pensar y analizar procesos en curso. Creo que las constataciones y reflexiones que pueda

desarrollar aquí, están sujetas a una inestabilidad y una precariedad de un proceso que todavía se encuentra abierto. Pero me imagino que para cualquiera ha sido particularmente sorpresivo en cada momento, y también nos ha mostrado que los procesos de cambio o las coyunturas y los escenarios que se abren a partir de estallidos sociales de la envergadura que tuvo en Chile, no son lineales.

Tal vez en algún momento pecamos de ingenuidad al pensar que era un camino lineal, cuando en realidad ha habido altibajos. En este momento, nos encontramos en un punto bajo en términos de ánimo y perspectivas. Nos preguntamos si este ciclo llegó a su fin o si continuará de alguna manera, aunque sea transformado. Para partir ya con este primer interrogante, haciendo una síntesis de esto, este estallido social que emerge en Chile en octubre del 2019 ya ha tenido cierta trayectoria. Respecto al debate sobre cómo denominarlo, yo tiendo a inclinarme por llamarlo revuelta popular, porque me parece que estallido resulta ser insuficiente.

Es una revuelta popular en términos de su amplitud, de su masividad y de su alcance. Tiene un alcance nacional importante. Creo que no había existido algo con ese nivel de envergadura en la historia de Chile. Incluso en Santiago, ciudad donde han existido estallidos populares de gran envergadura a partir de temas relacionados con la calidad de vida, la vivienda, el transporte. Y hay que recordar que esto parte en Santiago y con un tema de transporte. Es una coyuntura que rápidamente, de manera muy sorpresiva para todas y todos nosotros, se agranda y se hace nacional.

Una primera cuestión que hay que señalar aquí es que esto es un momento de convergencia, de algo que es un ciclo de conflictividad social bastante largo. No es una cuestión que se pueda explicar con un escenario inmediatamente anterior a ese octubre del 2019. Este ciclo de conflictividad y de malestar ha sido protagonizado por diversos actores. Se suele decir que el antecedente de octubre del 2019 fue el movimiento estudiantil, del cual emerge la dirigencia que tenemos ahora en el gobierno con personajes como Camila Vallejo y el presidente Gabriel Boric. Fue un movimiento muy importante,

de mucha envergadura, que al momento del estallido estaba totalmente a la baja. Y, sin embargo, uno tiene que entrar a matizar, porque la verdad es que ya existían luchas previas por las pensiones, luchas medioambientales, la oleada feminista, pero también un movimiento indígena fuerte desde fines de los noventa, fundamentalmente el movimiento mapuche, que marcó un quiebre con el consenso democrático de ese periodo y el inicio de un camino de confrontación con el Estado.

Además, se trata de un movimiento muy heterogéneo. Esa vertiente que confronta al Estado es una, hay otras, pero todas interpelean fuertemente al Estado. Yo diría que hay que construir un pacto político y social distinto. Tiene que haber una nueva Constitución Política. Yo lo empiezo a ver primeramente allí, en el movimiento indígena. Para discutir una primera cuestión de si los movimientos de mujeres o indígenas podemos reducirlos a movimientos “identitarios”, como si carecieran de una dimensión nacional o de una dimensión económica, como si lo identitario se restringiera a cuestiones de reconocimiento cultural, la verdad es que yo no lo veo así, no lo veo además en ninguna parte, pero especialmente no lo veo en la coyuntura chilena.

Para discutir una lectura que construyó una genealogía urbana y centralista del estallido social en Chile, otro elemento a considerar es que abre una coyuntura de crisis política durante un gobierno de derecha, que es el de Sebastián Piñera. En el punto donde convergen masas movilizadas, resulta difícil afirmar que todos esos participantes, en su mayoría, eran parte de movimientos o actores organizados. Por otro lado, se encuentran diversas organizaciones, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, muchos de ellos recién formados. Había una clase política que ya se había transformado bastante respecto de lo que había sido el mapa político más convencional de la transición democrática. Es un bloque o un campo popular por la transformación en ciernes, en el sentido de que le faltaba, por ejemplo, una conducción política más evidente. Insisto en que todos los movimientos sociales estaban en

un momento de baja energía y de baja presencia pública. En este contexto se produce en noviembre del 2019 el llamado Acuerdo por la Paz. Este acuerdo, elaborado por la clase política en el Parlamento, define una salida institucional a la revuelta popular.

¿Cómo se sale de un momento así? ¿Cómo se encauza? Es algo que se va produciendo *in situ*, y aquí se propone una salida institucional desde el Parlamento, centrada en la cuestión constitucional. Para eso se definió un itinerario constituyente con un plebiscito de entrada, elección de constituyentes y un plebiscito de salida. Eso generó confusión y mucha desorientación, porque no hubo diálogo entre la clase política, con los partidos de izquierda y los actores sociales, o si lo hubo, fue muy escaso y no vinculante. No hubo consulta sobre la agenda y sobre la forma de encauzar el proceso. Yo fui bastante crítica en lo público también de ese acuerdo pero, al mismo tiempo, valoré su existencia. Esto lo firmó la derecha y la ultraderecha en Chile, a regañadientes. No querían. Le temen a la política popular, le temen a un proceso para definir las cosas y que los marcos que nos regulan sean participativos, porque tenemos una trayectoria autoritaria en materia constitucional y porque la Constitución de 1980 es uno de sus baluartes ideológicos más poderosos respecto al modelo neoliberal y del proyecto que instalaron desde el golpe de 1973. Por su parte, los actores y los movimientos se embarcan de manera subordinada en este proceso constituyente.

Una cuestión importante es: ¿por qué tenía que ser solo un itinerario constituyente? ¿por qué no se negociaron más cosas en un momento de particular debilidad política de los poderes fácticos? En el plebiscito triunfa de la opción “Sí”. Se conforma una convención constitucional con mayoría abrumadora de centroizquierda, con fuerte presencia de actores sociales y de independientes, características que son absolutamente inéditas para nuestra historia política. Fue como si de la noche a la mañana todo esto se volviera tan relevante que de repente nos encontramos abordando temas que parecían imposibles de discutir en la esfera pública en Chile. Y no solo eso, sino que también lo estábamos haciendo de manera

bastante vanguardista en algunos aspectos. Por un lado, con escaños reservados para indígenas en esta Convención. Por otro, si no me equivoco, es el primer órgano donde se establece como condición de entrada la paridad de género. Insisto en que el valor de esta instancia es que se instala en un país con una tradición constitucional autoritaria, con una “estabilidad” que pasa por la profesionalización de la política, y que podría haber asumido una forma burguesa clásica, pero que en su lugar asumió una forma muy plebeya y popular.

En el plebiscito de salida va a ocurrir el triunfo contundente del rechazo a la propuesta de una nueva Constitución. Una nueva Constitución que al leerla era efectivamente un “deber ser”, una declaración de principios muy inspiradora, emancipadora. Esto hacía que uno se preguntara ¿somos tan espectaculares? Definitivamente no, no lo éramos. Se rechaza esa propuesta de Constitución y ahí el análisis que se puede hacer a ese triunfo tan contundente de la opción del rechazo es complejo en el que intervienen muchos factores y motivaciones. Hay mucho rechazo allí. Lo digo porque una primera respuesta, no errada pero simplificadora, es decir que se nos despertó el racismo y la xenofobia. Lo que uno observa, al menos desde mi perspectiva como historiadora, es que a lo largo de la historia las sociedades que han llevado a cabo revoluciones también han sido racistas, misóginas y patriarcales. El punto es ¿por qué ese sector de la población encuentra tanto espacio? Como digo, hay muchos tipos de rechazos allí. Fue una cuestión bastante heterogénea y tendremos que seguirlo analizando, pero es importante mencionar que se enmarca en una embestida brutal de los poderes fácticos. Esto hace que me pregunte, ¿por qué combatieron con tanta brutalidad esto que fue un aparataje prácticamente incontrarrestable? ¿por qué lo embisten con tanta brutalidad?

No veo la respuesta únicamente en el texto constitucional y los derechos consagrados allí, ni en el marco del pacto establecido. Yo creo que siempre existe la posibilidad de aprobar para después dejar como letra muerta. Pero me parece que aquí lo que se advirtió, y esto

ya ha ocurrido en el pasado, fue el peligro de la política con pueblo. Y por eso usaron con tanto ahínco la táctica del desprestigio, de la ridiculización y la activación de un fascismo popular desde arriba, en un contexto duro como fue el de la pandemia, que también intercedió aquí para torcer un poco el curso de las cosas. De hecho, con la pandemia se alteró el calendario del proceso, aplazándose seis meses. Eso significó que el plebiscito de salida, que tendría que haber sido en el gobierno de derecha de Piñera, ocurre en el gobierno de izquierda o de coalición de izquierda. Hay que ver ahí también cuánto pesa en términos coyunturales, una cuestión que está en el estallido muy fuerte y que en este contexto nos puede haber jugado en contra, que es el estar en oposición a quien gobierna.

Habrá que observar cómo van adquiriendo peso los diferentes elementos. Estoy señalando aspectos que no necesariamente se están construyendo como cierto consenso de este análisis. De hecho, en el análisis de la derrota aparecen varias de las inquietudes que se nos propone reflexionar. De partida, surge en el debate público la discusión en torno a cómo hacer política transformadora por parte de distintos actores. Me parece que esta reflexión, en última instancia, intenta ser optimista y señala una ganancia que, aunque no resuelve por completo el problema, es un paso adelante. Todos los actores están considerando cómo llevar a cabo una política transformadora en un escenario que, en principio, es favorable debido a un estallido social de esa magnitud. Por ejemplo, para los partidos de izquierda, surge la disyuntiva de cómo relacionarse con los actores y movimientos sociales, muchos de los cuales han surgido de este contexto. Esto ha generado muchas discusiones internas que incluso han llevado a rupturas significativas o a consensos precarios.

Por ejemplo, cuando se firmó el llamado Acuerdo por la Paz, varios de estos nuevos partidos de izquierda tuvieron fugas de militantes porque no estuvieron de acuerdo con firmar sin un diálogo social más amplio. También está el tema de cómo hacer política con pueblos desde la izquierda. No necesariamente ser de izquierda

implica tener base popular. De hecho, aquí lo que se mostró es que nuestros partidos de centro y de izquierda carecen de bases populares importantes y también carecen de arraigo territorial.

Por otro lado, para las organizaciones y movimientos sociales la pregunta –y el desafío, también– es por la política desde los espacios institucionales, sobre todo cuando surge la necesidad de incidir en los debates nacionales y en la disputa por el Estado. Porque también son movimientos y son signos de época que se alimentan en algún punto del discurso anti Estado o de un discurso por la autogestión y la autonomía que pasa por descalificar el espacio del Estado. Me parece que una cuestión que también es relevante destacar es que todos los actores mueven sus convicciones políticas iniciales. Tanto la esfera institucional partidista como la de los movimientos y organizaciones están considerando la transformación y reflexionando sobre la relación entre lo particular y lo general. Reconocen la necesidad de establecer vínculos diferentes con la esfera estatal y con la de los movimientos sociales.

Esa relación entre lo particular y lo general es uno de los temas que se nos propone reflexionar aquí y que es absolutamente neurálgico. Me parece que hay un sesgo en la dicotomía que a menudo se plantea en los debates teóricos, y que ahora vemos también en el discurso público al interpretar el proceso chileno, especialmente la derrota en el plebiscito. Allí reaparece de manera poco productiva una dicotomía entre lo particular, asociado a la identidad, y lo general. Esta lectura se ha arraigado en el análisis del proceso constituyente, donde prácticamente todos los “nuevos temas” que surgieron allí fueron etiquetados como política identitaria. Se percibía esa política identitaria como algo específico y particularista, sin visión general ni articulación más allá de intereses propios. Parecía carecer de un análisis de clase social y de una dimensión económica, aunque se reconocía como legítima.

Me parece que esta perspectiva es reduccionista respecto a los movimientos sociales y sus causas, que no son contemporáneas en absoluto. La diversificación de la emancipación, más allá de la

categoría exclusiva de clase social, es un tema que ha sido discutido por las mujeres desde el principio, también por los movimientos de sectores racializados, que tienen más de un siglo de historia. Esto no es algo exclusivo de la globalización actual ni contemporáneo. Aquí se está operando un reduccionismo en el análisis que, aunque seductor, es equívoco y, finalmente, cae en ingenuidades, lo cual no es necesariamente malo, pero es interesante cómo en esta esfera pública se replican debates que tienen una trayectoria en el ámbito teórico y una larga data como problema histórico.

También se observa en el ámbito de los desarrollos teóricos una crítica a la política democrática burguesa y liberal, así como una crítica a la reducción exclusiva a la dimensión de clase. Desde este último enfoque, se critica a aquellos que son acusados de adoptar un enfoque culturalista, aunque en ocasiones las cosas no funcionen de esa manera necesariamente. Me parece que hay explicaciones políticas sobre por qué en este momento ciertas luchas, demandas y discursos emancipadores están siendo descalificados de manera bastante peyorativa como “política identitaria”. El problema radica en que esto, inicialmente, fue propuesto por la derecha. Parte de la izquierda partidista e intelectual, que tiene una mayor presencia en la esfera pública burguesa, suscribe este análisis lanzado por los *think tanks* de la derecha.

La agenda de esos *think tanks* busca reducir y desacreditar todas las demandas sociales, tachándolas de “populistas” y calificándolas como identitarias. Por ejemplo, desde el Centro de Estudios Públicos (CEP), se afirmó que la Convención estaba dominada por la izquierda decolonial y académica, lo cual es extraño porque el enfoque decolonial suele rechazar las categorías de izquierda y derecha. Lo preocupante es que una parte importante de la izquierda partidista, académica y crítica, suscribió este enfoque. Esto no significa que no se deba revisar críticamente la política desplegada por el conjunto de actores, incluidos los partidos políticos. Creo que es necesario revisar todo esto para aprender y acumular conocimiento sobre cómo enfrentar situaciones similares en el futuro.

Sin embargo, esta crítica debe tener como objetivo principal la articulación del campo popular y construirse con aparatos conceptuales propios, no con los que provienen del campo oligárquico, como parece estar ocurriendo actualmente en Chile.

Segundo y tercer interrogantes: ¿cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadora y a qué reacciones se enfrentan?, y ¿cuáles son los modos bajo los que se forman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertinencia?

Claudia Zapata: Sobre ese tema, que ya he abordado de algún modo en esta primera parte, siento la necesidad de profundizar en dos cuestiones. La primera se refiere a los actores y las comunidades políticas emancipadoras, y la segunda a la cuestión de la relación con el Estado, que estaba presente en la formulación del tema propuesto.

En primer lugar, respecto a los actores y comunidades emancipadoras, creo que es crucial historizar, contextualizar y humanizar la idea de emancipación. ¿Qué quiero decir con esto? La historia de los pensamientos emancipadores y de sus prácticas políticas tiende a iluminar un aspecto de la opresión mientras deja otros en las sombras. En la coyuntura chilena actual, que todavía está en desarrollo, observamos que la emancipación es un proyecto y un desafío constante que también interpela a los propios sectores que la buscan. Por un lado, pueden estar impulsando los límites del pensamiento sobre la transformación, pero por otro, pueden estar reproduciendo dinámicas que no son necesariamente democráticas.

El campo popular, que se visibilizó durante la revuelta popular en Chile, indudablemente tiene un horizonte emancipador, pero al mismo tiempo ha mostrado limitaciones. Se observó la exclusión de ciertos actores sociales del proceso constituyente, y los movimientos, actores y partidos no mostraron la contundencia necesaria para autocriticarse y abordar esta situación. Por ejemplo, no se

discutió de manera suficiente la xenofobia y el creciente racismo que dejaron fuera del proceso a los afrochilenos y a los migrantes. Hubo una clara falta de solidaridad con estos sectores dentro del propio campo popular. Además, en este momento, algunos sectores de izquierda están participando de la denostación del movimiento feminista y del movimiento indígena. Estos sectores son los más ridiculizados por el relato predominante de la derecha, pero también cuentan con el respaldo de algunos sectores de izquierda.

En segundo lugar, el tema de las autonomías comunitarias y su relación con el Estado no puede reducirse a la dicotomía entre autonomistas y “estatistas”, como a menudo se plantea en los debates dentro de los propios circuitos políticos y activistas. Me parece que esa dicotomía entraña riesgos, ya que el valor de cada enfoque depende del contexto histórico. Por ejemplo, en Chile, en esta coyuntura, existe una clara pulsión y necesidad de recuperar el papel del Estado y su función social. Si bien algunos sectores de los movimientos sociales pueden tener otras perspectivas, en general están demandando una mayor intervención estatal y vieron en esta coyuntura la posibilidad de incidir en una reingeniería del Estado. Eso estará por verse a futuro.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que no se cuestione la existencia de un Estado poderoso que es cooptado por los poderes fácticos. En esta coyuntura, se ha debatido profundamente sobre este tema, así como sobre el centralismo imperante en el país. Considerando nuestro contexto histórico en Chile, la cuestión del Estado es central en la lucha contra un proyecto neoliberal radical y de largo aliento.

Lo que más nos desafía en Chile en este momento, es el sentimiento de pesimismo en los ambientes activistas, en las organizaciones sociales y también en los partidos y la coalición gobernante. Sin embargo, creo que es importante hacer un análisis de los logros y avances para poder enfrentar los desafíos que se nos presentan ahora, a pesar de que estemos en una situación de desventaja tras la derrota en el plebiscito.

Es fundamental reflexionar sobre cuáles han sido las ganancias, incluso si son pequeñas y aunque todavía no hayamos logrado transformar materialmente nada. En esta coyuntura, se ha hecho posible cuestionar el modelo de acumulación, para rechazarlo y proponer alternativas. En este sentido, creo que toda esta diversidad de la coyuntura muestra una clara pulsión antineoliberal. En algunos aspectos, se manifiesta inclusive una tendencia anticapitalista, aunque no necesariamente sean lo mismo. Creo que esto también nos permite repensar las tradiciones de la izquierda.

Una lección que podríamos extraer de este plebiscito y del triunfo de la opción del rechazo, donde proliferaron muchas *fake news* de la derecha, es que la izquierda también debe ser más eficiente en su reflexión, sistematización y en mostrar que una izquierda contemporánea no implica la disolución del individuo al mismo tiempo que no se descuida, la dimensión colectiva. En este sentido, nos faltó construir consignas que apunten en esa dirección. Por lo tanto, creo que la pulsión antineoliberal sigue siendo relevante, incluso si el resultado del plebiscito fue el rechazo.

Otra ganancia es que esta coyuntura ha creado un escenario propicio para visibilizar actores, movimientos sociales y partidos que anteriormente no tenían posibilidad de acceder al Gobierno, por ejemplo. Es una situación sin precedentes que ha permitido poner de manifiesto los logros teóricos de todos estos movimientos, los cuales son acumulativos y tienen un alcance transnacional. Por ejemplo, ¿cómo podríamos negar la dimensión transnacional, global y universal del movimiento feminista, así como de los movimientos indígenas, entre otros? En este sentido, se ha destacado la importancia de los constructos teóricos que han sido desarrollados a lo largo de varias décadas y que no se limitan únicamente a lo local.

Para ir cerrando, considero que el principal logro de este espacio “institucional”, transformado en una especie de escenario político plebeyo, es la creación de un espacio de encuentro que no existía anteriormente. Aquí se han reunido sectores que solían seguir

caminos separados, sin dialogar ni negociar en condiciones de igualdad. En este espacio se encuentran feministas, representantes indígenas, nuevos y antiguos partidos de izquierda. Creo que este es un logro tremendamente positivo que debemos valorar.

Debate

Pregunta: ¿Cómo valoras la cuestión del voto obligatorio? Aunque puede parecer un tema procedimental, desde mi perspectiva como politóloga y también socióloga, creo que tiene una gran importancia política. Vengo de un país con un pasado similar al chileno y con características específicas en cuanto a las formas de manifestación electoral, como votos ocultos, entre otras. Pienso que el voto obligatorio es un factor importante a tener en cuenta. Quizás en los resultados de las constituyentes. No sé qué es lo que planteas tú, porque si ves los porcentajes que suben y bajan, sí, realmente, parece que hay ahí como un 18 % que ya no hubiese votado de ninguna forma, ni apoyado ningún tipo de concentración constituyente.

Claudia Zapata: Yo creo que el voto voluntario en sociedades tan desiguales como la nuestra deja totalmente fuera a los pobres de ese tipo de decisiones. En Chile, hace aproximadamente 20 años se aprobó el voto voluntario, absolutamente voluntario, y eso bajó los niveles de participación de manera catastrófica. Entonces veníamos de 20 años donde esta cuestión ya era así, estaba esa práctica, con un montón de gente desafectada de la política, al menos de la política electoral.

Entonces, ¿qué sucede con este proceso constituyente? Creo que es una pregunta crucial que debemos abordar ahora. No pretendo hablar desde una posición de clarividencia, ya que en su momento no lo hicimos, simplemente no nos dimos cuenta. Pero es importante analizar los sectores políticos que negociaron este camino constituyente.

Negociaron en condiciones de disparidad absoluta, lo que hacía imposible prever el resultado. El proceso constitucional comenzó con voto voluntario y terminó con voto obligatorio. En un contexto de pandemia y miedo generalizado, especialmente al cambio, esta situación se vio exacerbada. Más del 80 % del padrón votó en el plebiscito de salida, incluyendo a aquellos que se vieron obligados a hacerlo. Mucho de ese voto popular por el Rechazo fue descalificado al día siguiente con calificativos como “desclasados”, sin embargo, el problema de fondo es otro, es cómo hacer política en contexto de voto voluntario, que en términos sociales es más democrático. La izquierda debe estar del lado de los menos privilegiados, sin importar su voto.

Sin embargo, esta población, cuyo acceso a información de calidad es limitado, tiende a basar sus decisiones en lo que ven en la televisión. Este es un problema arraigado que no se resolverá fácilmente. Carecemos de medios de comunicación éticos y democráticos. Entonces, con esa información fueron a votar. Me parece que el voto obligatorio es un factor procedimental, pero procedimental histórico. Así que te lo agradezco, porque es un tema que tenemos que pensar y también tenemos que pensar la política del voto obligatorio. Mi postura no es volver al voto voluntario debido a que esto termina siendo una política aplicable a muy pocos. Por lo tanto, el desafío es aún mayor. Se trata de cómo abordar el hecho de que el 62 % que votó por el rechazo no sea calificado de fascista en su totalidad, sino de cómo podemos trabajar para construir el voto popular en ese sector.

Pregunta: Otro aspecto bastante formal es el tema del tiempo. ¿Cómo ves tú la disciplina en una asamblea constituyente con un límite de tiempo tan marcado? Lo digo pensando en otras experiencias. Por ejemplo, en Bolivia, cuando se inició la Asamblea Constituyente, se estableció un plazo de tres años. Quizás no eran necesarios los tres años, ya que habían sido cinco años de protestas y tres de asamblea constituyente. En Chile, a pesar de la intensidad

de las protestas, el tiempo para la asamblea constituyente parece bastante limitado. Creo que, dada la importancia de abrir un espacio para el diálogo y la confrontación, quizás limitar tanto ese tiempo puede dificultar la tarea de reconstruir y reformular. No sé, me parece que intentar encorsetar este tipo de procesos podría ser un factor para considerar.

Además, está la cuestión de la organización misma de la asamblea constituyente. Hablando de otros ejemplos, como el caso de Bolivia, los constituyentes iban a diferentes lugares para recoger sugerencias, o al menos se celebraban foros territoriales cada dos meses. Es interesante notar que en la Comisión de Economía no había representantes ni del Frente Amplio ni del colectivo socialista. Esto plantea la pregunta de cómo se puede poner en práctica un esquema nuevo si no se consideran adecuadamente las cuestiones materiales. Es fundamental tener en cuenta la diversidad de perspectivas y enfoques en la formulación de políticas económicas. ¿Cómo lo ves tú?

Claudia Zapata: No lo sé. Creo que hay varios elementos que me hacen pensar que sí y otros elementos que me hacen pensar que no. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, duró menos de un año. Por eso yo tiendo a pensar que los factores de coyuntura tuvieron mucho peso en el caso chileno. Por un lado, el paso del voto voluntario al voto obligatorio en un pestaño. Por otro lado, si uno hace la comparación con otras situaciones cercanas, con temas parecidos en una propuesta de texto constitucional, como fue el proceso boliviano y el ecuatoriano en esta trayectoria de constitucionalismo latinoamericano o popular, me parece que un factor tal vez más gravitante, fue que en ambos casos los gobiernos no fueron imparciales, sino que salieron a hacer campaña, tuvieron medios de comunicación, salieron a disputar el voto. En cambio, en nuestro caso, aunque era evidente que el gobierno estaba de acuerdo, no ingirió, tampoco tuvo las herramientas para disputar el voto. No nos movilizó. Es una izquierda burguesa que desde que llegó al gobierno no nos

movilizó nunca más y que hasta el día de hoy nos teme. Además, cabe destacar que hubo una orden de Contraloría para evitar que los gobiernos en funciones influyeran en las elecciones. Sin embargo, paradójicamente, esta normativa beneficia principalmente a la derecha, que cuenta con amplios recursos mediáticos. Eso también nos estalló en la cara. Estos factores, junto con la debilidad generalizada que experimentamos todos los sectores para crear consignas que conectaran los temas jurídicos generales con la calidad de vida cotidiana, representan nuestra falla.

Pregunta: ¿Podrías hacer algún comentario adicional sobre este tema que mencionaste relacionado con las cuestiones de género? Es interesante observar cómo, tanto en el referéndum o plebiscito en Chile, que resultó en un “no”, como en el caso de Colombia durante las negociaciones de paz, también hubo un resultado negativo. Ambos eventos compartieron algunos argumentos comunes, como el temor de que un “sí” implicara la aplicación de una paz con perspectiva de género, que la derecha denomina como “ideología de género”. La pregunta concreta aquí sería: ¿Qué tan grande es el riesgo de que este pensamiento conservador o de derecha, que ataca directamente la perspectiva de género, se imponga en otros procesos similares?

Claudia Zapata: Bueno, ese es uno de los elementos de la política de la ultraderecha transnacional, ya que también se articulan a nivel global. Además, no es solo un uso tendencioso, sino que también lo creen fervientemente. A mí me parece preocupante que, en este momento, la ultraderecha también esté renovando algunos de sus puntos. Ahora tiene nuevos enemigos: los movimientos indígenas y los movimientos de mujeres. Además, los movimientos feministas nunca antes habían sido movimientos de masas. Esta es la primera vez que son movimientos masivos, al menos en la historia latinoamericana, pero imagino que es más o menos similar en todas partes. Siempre han sido movimientos importantes, pero el hecho de

que ahora sean de masas es probablemente la primera vez. Y bueno, lo preocupante para mí, y lo dejo ahí porque no tengo ninguna respuesta ni solución, por supuesto, es que esa política de la ultraderecha encuentre aliados en el campo popular. Ese es el problema.

Pregunta: ¿Cómo estos procesos y métodos de desarticulación del discurso popular y de la razón, relacionados con los estallidos, terminan provocando políticas identitarias y diferencias dentro de la misma población? Comienza a haber pleitos y los puntos comunes, que muchas veces son económicos, como la explotación, el trabajo y la pobreza, pasan a segundo plano. Entonces, ¿cómo estos métodos discursivos de la derecha para desarmar las demandas populares acaban enfriando y desarticulando políticamente todo?

Claudia Zapata: Sobre el tema de la desarticulación de la razón de los estallidos, como tú lo llamaste, dijiste una cosa que a mí efectivamente me parece preocupante y que tiene que ver también con cierta estrategia de dividirnos, porque esto de que los temas identitarios dividen a la ciudadanía y que hace que los temas económicos y sociales pasen a segundo plano, me parece discutible, pero precisamente desde los mismos sectores por la transformación fuimos poco eficientes en discutir eso. Por ejemplo, las temáticas de derechos de los pueblos indígenas no se entienden sin la redistribución del ingreso económico, no se entienden sin la descentralización territorial y la descentralización de la toma de decisiones políticas. Y, además, otra cosa que se nos olvida acá en Chile, cuando están echándole la culpa a los constituyentes indígenas y a las feministas, es que tanto indígenas como feministas tomaron la estrategia de estar presentes en todas las comisiones de la Convención y no trabajaron solamente para aprobar artículos relacionados con sus causas. Hay una perspectiva transversal allí, creo yo. Si los movimientos hubieran sido identitarios o culturalistas, no hubieran sido un problema, especialmente si se tratara de movimientos indígenas. Si se hubieran centrado exclusivamente en derechos

culturales, eso no habría molestado a nadie. El tema es que tocaba la distribución del territorio, de recursos económicos y del poder político, precisamente por no estar restringidos a lo identitario, eso fue lo que causó el escozor.

Pregunta: Me gustaría saber el papel –tanto dentro como fuera de las instituciones, así como dentro de las organizaciones políticas tradicionales de izquierda–, que desempeña la educación popular. ¿Cuál es su papel en términos de convertirse en una estrategia para los grupos políticos? Porque yo creo que, a través de la educación popular, su conexión con la teología de la Liberación y su contexto de la liberación como filosofía, juega un papel importante en el debate sobre la relación entre lo particular y lo general, los sujetos y los colectivos. ¿Qué papel desempeña principalmente en Chile, donde Freire publicó su *Pedagogía del Oprimido*?

Claudia Zapata: Yo te diría que, en cuanto al método y al tema de la conversación, no lo veo tan presente. Puedo estar equivocada, pero no lo percibo tan presente en este momento. Sin embargo, lo veo como una práctica presente en ciertos círculos. Por ejemplo, cuando me llaman para participar en espacios culturales o activistas, si me llaman, voy sin dudar, porque hay una gran necesidad de autoformación. Entonces, para mí también es una oportunidad de aprendizaje: ¿qué están discutiendo?, ¿qué están leyendo en los espacios de las organizaciones sociales?, ¿qué temas se abordan en sus talleres de lectura? A veces me invitan a conversar sobre un tema específico y comparto lo que sé, lo que observamos y cómo podemos abordarlo juntos. Hay una actividad muy intensa en estos espacios de autoformación. He observado esto tanto en los espacios feministas como en los del movimiento indígena, así como en los partidos políticos. Existe una necesidad de informarse y aprender, una curiosidad por entender hacia dónde se dirigen los desarrollos teóricos y políticos en ciertas áreas, reconociendo que puede haber deficiencias en ese conocimiento.

Pregunta: ¿Cuándo o cuál acto marca el inicio de un estallido social o determina que estamos ante ello, y qué diferencia existe entre una movilización, manifestación y el estallido?

Claudia Zapata: Yo creo que llamamos estallido a una gran explosión y yo creo que ocurrió, no digo que eso esté errado. El tema es que la continuidad y la envergadura lo hizo insuficiente y por eso algunos preferimos hablar de revuelta popular, también para rescatar acervos teóricos, de larga data en el campo de la izquierda. Ahora, respecto a cuándo empieza y cuándo termina. Para nosotros fue súper evidente que inició –con sus antecedentes entre todo este ciclo de conflictividad– el 19 de octubre; es un consenso que nadie puede discutir. El 19 de octubre del 2019 fue un gran estallido que rápidamente pasó a ser una revuelta popular. Ahora, si el ciclo está cerrado o no, no lo sé. Eso no tenemos cómo intuirlo. No tenemos cómo saber si una nueva revuelta popular de estas características va a ocurrir en un año más, en tres años más, en cincuenta años o nunca más. Eso es imposible. Yo soy historiadora, y los historiadores somos bastante malos para predecir el futuro, cuando lo hacemos nos va muy mal. Así que no me voy a meter en ese terreno. Pero sí me preocupa la construcción de memorias populares que nos puedan servir como herramienta por si eso se produce alguna vez, porque había temas en los que no operó el acumulado histórico y en otros sí. Entonces, si esto se cerró o no, tal vez se cerró un camino constituyente popular, pero a lo mejor no se ha cerrado la informalidad y una nueva forma en que esto se exprese. El problema es que, si no aprendemos a encauzarlo de manera emancipadora, vamos a seguir acumulando muertos y no necesariamente transformaciones reales. Esa es mi preocupación real.

Pregunta: ¿Los destrozos y perjuicios a bienes o propiedades son un componente elemental o convergente en un estadillo social?

Claudia Zapata: Sobre si los destrozos son inherentes o no a un estallido. Voy a decirlo sin una perspectiva moralista, que también a veces pesa bastante en estos debates. Para mí, la violencia política es un proceso histórico. La violencia política popular la tengo que entender como lo que le queda a los desempoderados para manifestarse. Había un debate en torno a cómo se expresó esto. La primera discusión era “no es la forma, las cosas no se hacen así. Si usted quiere pedir algo, venga, tóquenos la puerta o mándenos una carta”. Bueno, ya sabemos que eso es ilusorio, que no funciona. Es terrible porque los que viven el mayor costo de esa violencia política popular son los propios sectores populares. Porque a ti te reprimen, te matan, te mutilan. La cantidad de mutilados oculares en Chile hasta el día de hoy es terrible. En fin, me parece que la violencia política hay que entenderla como un elemento constitutivo o como una parte del repertorio posible de los sectores desempoderados. Así lo entiendo yo. Y además un tema que no hemos tocado, me parece notable cómo se repitieron en esta coyuntura los actos de iconoclasia. Esta palabra puede sonar un poco rebuscada, pero se refiere a intervenir la estatuaría y la esfera pública. Es parte de ese repertorio de acción directa.

Pregunta: ¿Cómo explica el hecho de que el rechazo a la propuesta constitucional alcanzó entre 70 % y 80 % en las zonas mapuches del país?

Claudia Zapata: Es un tema complejo que ha servido también para descalificar las demandas del movimiento indígena, porque se llega a decir “los mapuche votan por la derecha siempre”. Pero ¿quiénes son realmente los mapuches? Estos cálculos generalizados no tienen en cuenta la diversidad de la población mapuche. Pues bien, la gran mayoría de la población mapuche no vive en esos territorios, vive en las ciudades. Y en esas comunidades de mayoría mapuche, efectivamente un gran porcentaje votó por el rechazo. Pero también se vota generalmente allí por la derecha, pues pareciera

pervivir cierta memoria de negociación con una antigua derecha hacendal. Se trata de esa antigua derecha donde los patrones de la hacienda se sabían tu nombre e iban al bautizo de tu hijo. Una derecha con la que el pueblo mapuche consiguió ciertas conquistas, y no necesariamente con los gobiernos posteriores. Esto puede ayudar a entender la votación de algunos sectores, pero no representa el voto mapuche en su totalidad. Para nada. Insisto, creo que el 70 % vive en las ciudades, así que hay que tener cuidado con esos juicios.